



Por Vicenç Navarro

La lucha de clases en EE.UU.

Durante la época Bush júnior, las familias de clase trabajadora (que en EE.UU. se las define como clases medias) vieron una reducción de su ingreso familiar de 2.500 dólares. Esta reducción salarial contrastó con el enorme incremento de los beneficios empresariales. La disminución de las rentas de la clase trabajadora ha sido una consecuencia de la debilidad de los sindicatos, resultado de la enorme agresividad de la clase empresarial apoyada por la Administración Bush que ha hecho todo lo humanamente posible para reducir el poder y la influencia sindical en las empresas. Sólo el 7,5% de los trabajadores están sindicalizados, y ello a pesar de que la mayoría de trabajadores en EE.UU. indican que desearían estar sindicalizados si se les diera la oportunidad de hacerlo, lo cual no es nada fácil debido a las grandes dificultades que el mundo empresarial pone a que los trabajadores se sindicalicen. En EE.UU. hay, en general, una relación clara entre el grado de sindicalización de una empresa y el salario de los trabajadores que están sindicalizados en aquella empresa. Los convenios colectivos, por cierto, sólo cubren a los trabajadores del sindicato que negocia, no a todos los trabajadores en la empresa. De ahí que el debilitamiento de los sindicatos a nivel empresarial haya sido una estrategia clave para reducir los salarios.

El cambio de gobierno, con una Administración y un Congreso más sensibles a las peticiones de los sindicatos (que apoyaron activamente el cambio ocurrido en la Administración y en el Congreso) ha creado una lucha intensa entre éstos y las asociaciones empresariales. Si usted visita EE.UU. estos días, verá en la televisión anuncios a favor y en contra de la Ley EFCA (Employee Free Choice Act), "La ley de la libre elección en el puesto de trabajo" refiriéndose en el título de la ley a la libertad que los empleados debieran tener para sindicalizarse si así lo desean, impidiendo los obstáculos que la empresa pone para que tal libertad se manifieste. Tal ley ha sido propuesta por los sindicatos y ha sido apoyada por la Administración Obama. La Ministra de Trabajo de tal gobierno, la Sra. Solís (que fue sindicalista, y de padres sindicalistas y la Ministra más progresista del gobierno Obama, apoya activamente la ley frente al director de la oficina económica de la Casa Blanca, el Sr. Lawrence Summers (próximo a la Banca) que se opone. El Presidente Obama, sin embargo, la apoya. La Cámara de Comercio se opone activamente, invirtiendo 200 millones de dólares en campañas televisivas para derrotarla, argumentando que la aprobación de tal Ley implicaría "la desaparición de la civilización americana", frase que utiliza en la promoción de su postura antisindical. Tal promoción utiliza, por cierto, declaraciones que el Sr. Summers había hecho en el pasado oponiéndose a tal propuesta de ley. Esta Ley, en caso de aprobarse, tendría un impacto sustancial en el incremento de los salarios. Hoy un trabajador sindicalizado consigue, como promedio, un salario que es 33% superior al del trabajador no sindicalizado. Tal crecimiento de los salarios se considera, por la mayoría del Congreso y del

Gobierno Obama, como un elemento muy importante del estímulo económico, permitiendo una mayor demanda por parte de la población.

El incremento salarial como medida de estímulo económico

Esta actitud contrasta con la existente en Europa, dominada por las fuerzas conservadoras y liberales (excepto España), donde se está proponiendo una congelación de los salarios como medida de salir de la crisis, una medida opuesta a la propuesta por las fuerzas progresistas de EE.UU. (Para una expansión de este punto, ver mi artículo en El Público titulado "La silenciada causa de la crisis", 19 marzo 2009).

Por cierto, hablando de salarios, permítaseme hacer un par de observaciones a raíz de las declaraciones de Paul Krugman en el encuentro de los empresarios andaluces. En tal discurso, Krugman indicó que una salida de la crisis en España podría ser el descenso de los salarios que harían los productos españoles más competitivos a nivel internacional. Como era de esperar, la mayoría de los medios conservadores y liberales han recurrido a esta presentación como voz de autoridad para enfatizar lo que han estado proponiendo desde hace tiempo: bajar los salarios que se consideren demasiado altos, y muy por encima de lo que les corresponde por su nivel de productividad. Paul Krugman, sin embargo, favorece la ley EFCA en EE.UU. y en una lectura más rigurosa de su discurso, se puede ver que señala que una política alternativa al descenso de los salarios en España sería el aumento de la productividad y no sólo del trabajador sino del sistema productivo, alternativa que él favorecía. En cuanto a la supuesta exuberancia de los salarios españoles, quisiera señalar que los datos no confirman tal exuberancia. El nivel de productividad de los trabajadores de la manufactura en España es el 75% de sus homólogos estadounidenses (año 2007), el mismo porcentaje prácticamente que los salarios de tales trabajadores representan de los estadounidenses (79%). Los trabajadores españoles no están sobrepagados. En realidad, en comparación con sus homólogos en la UE-15, están subpagados (ver Navarro, V., Tur, M. y Campa, M. "La situación de la clase trabajadora en España. Una comparación con los países de la UE-15 y EE.UU." en El Observatorio Social de España www.observatoriosocial.org).

La otra observación es que en España, consecuencia del dominio liberal en el pensamiento económico, se considera que la manera de aumentar la productividad del sistema es predominantemente flexibilizando el mercado de trabajo (ver las declaraciones recientes del gobernador del Banco de España) sin referirse a otras intervenciones como las inversiones públicas. A lo máximo que tales autores llegan es a considerar la necesidad de que el Estado invierta en educación, en comunicaciones, y en Investigación y Desarrollo, sin nunca considerar que una de las causas de la baja productividad de España es precisamente el bajo nivel salarial, la excesiva desregulación de los mercados de trabajo, y el bajo gasto público, incluyendo el gasto público social. La seguridad de la ciudadanía, lo cual se adquiere con la universalización de los derechos sociales y laborales, tiene un valor estimulante de la productividad mucho mayor que la inseguridad que las políticas liberales determinan. Es paradójico que las propuestas procedentes del pensamiento liberal estén promoviendo políticas de austeridad por parte de la clase trabajadora (que ha visto descender su capacidad adquisitiva de una manera muy notable, causa mayor de su endeudamiento y su escasa demanda) y por parte del estado (que en España adquiere unas dimensiones que la ponen a la cola de la UE-15 en gasto público y social) mientras que el mismo pensamiento liberal permanece callado sobre la necesidad de intervenir en la banca (forzando cambios en las condiciones crediticias, las más leoninas en la UE). Y continúa hostil a aumentar los impuestos de aquellos que alcanzaron beneficios exuberantes durante los años de explosión liberal (como ocurrió con la banca), para financiar aquella inversión pública y reducir las desigualdades de renta tan notables. Como comentó irónicamente el economista Robert Pollin durante los últimos días de la Administración Bush: "la banca y el mundo empresarial están pidiendo socialismo para ellos y capitalismo duro para todos los demás". Algo semejante está ocurriendo hoy en España. Se están dando pasos en EE.UU. para revertir esta situación, y sería urgente que se hiciera lo mismo en este lado del Atlántico.

Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra, España, y Profesor de Políticas Públicas en la The Johns Hopkins University, U.S.A.

(ver www.vnavarro.es / www.vnavarro.org)